

Notas para profundizar en la necesidad de la regionalización político-administrativa y económica de Colombia

Carlos Manuel, ZAPATA CARRASCAL

En Colombia, después de tanta existencia de Diversidad Étnico-cultural, la Constitución Política de 1.991, vino a reconocer la Multiculturalidad y Pluriétnicidad. No obstante, contrario a la realidad nacional, en gran parte ello siguió siendo más un cumplimiento estatal a los requerimientos del reordenamiento del capitalismo mundial, que un propósito institucional para posibilitar recuperaciones y oportunidades nacionales totalmente visibilizadoras que permitan tratar de saldar la deuda histórica con las etnias fundantes de nuestra nacionalidad.

Desde entonces, entramos tardíamente y por demanda más que todo externa ante las irrupciones dentro y fuera del país de los nacionalismos y movimientos étnico-sociales, en la moda de la pluralidad, diversidad y otras conceptualizaciones afines, que al igual que lo promulgado por el Estado Neoliberal desde la expedición de la mencionada Carta Magna, no ha sido coherente con las herencias ancestrales y problemáticas de indígenas, Afrocolombianos y pueblo ROM, a juzgar entre otras cosas, porque el creciente fortalecimiento de los sectores económicos y políticos históricamente dominantes, se ha efectuado sobre la base del detrimento y expoliaciones de los pueblos ancestrales, en especial de sus territorios, tal como sucede en estos días, manifestándose tales acciones no solo en las desposesiones materiales, sino también en lo ideológico, tal como sucede con la Etnoeducación, en donde se sigue focalizando el interés gubernamental en comunidades cerradas, mientras que debería, además de esto, extenderse esa modalidad educativa a todo el país, con el fin de poder dar a conocer y permitir que al menos en todos los niveles de la escolaridad, se participe en las problemáticas y valoración de los invaluable aportes históricos, culturales y socio-económicos de aquellas etnias.

La multiculturalidad y pluriétnicidad, no es un asunto reciente en la historia del País, como tampoco ese reconocimiento teórico, debería seguirse utilizando tanto por las dirigencias étnicas y estatales para aislar a indígenas y Afrocolombianos, tal como viene sucediendo entre los primeros por efecto de la pernicioso acción institucional que administrativamente separa legislativa y administrativamente la relación con unos y otros, sobre el supuesto de ser culturas diferentes, cuando en el fondo, lo que no quiere propiciarse es el dialogo de problemáticas, en el fondo comunes, como quiera que desde el punto de vista socio-económico estructural, tanto indígenas como Afrocolombianos están unidos por la base como consecuencia de los factores de pobreza, desplazamientos forzados, violencias y maltratos que de manera continua, más en este régimen neoliberal, desde mediados de los 80s, se han incrementado.

El divide y reinaras, ha sido tan contundentemente aplicado, que hasta gran parte de los líderes y líderesas indígenas y Afrocolombianos, han sido cooptados por la institucionalidad neoliberal, mafiosa y corrupta, transfiriéndoles sus irregulares prácticas de desangre, atajismos y doble moral, mientras que en simultaneo, está adhesión clientelista de algunos dirigentes étnicos hacia los propósitos del régimen imperante, ha

generado mayor pobreza en las comunidades y territorios donde residen las grandes mayorías de las personas pertenecientes a las mencionadas etnias. Los acontecimientos más recientes de la vida legislativa del País, confirman lo dicho, por cuanto en lo atinente con los requerimientos del gobierno y elites económicas de los Estados Unidos hacia el TLC con Colombia, el gobierno nacional tuvo que acudir inicialmente a un sector mayoritario de los altos consultivos Afrocolombianos, máximos jefes de esta etnia, para comenzar a aprobar una serie de leyes solicitadas por las transnacionales gringas para poder disponer a sus anchas de las riquezas naturales, los mercados y de la economía general del país en el marco del Tratado firmado con Colombia para tratar de superar la crisis financiera que estalló en USA hacia 2008. La tarea de reajuste de nuestro andamiaje jurídico-legal a las pretensiones foráneas, la finalizaron recientemente los congresistas, incluidas las bancadas indígena y afrocolombiana, a quienes el Gobierno de la Unidad Nacional pagó con creces el acto de sumisión a los dictámenes de las multinacionales y organizaciones comerciales y financieras extranjeras, suprimiendo y limitando los entes nacionales de control judicial y parlamentario de la corrupción y criminalidad. A cambio, en el período legislativo más reciente del Parlamento colombiano, se aprobaron leyes como la 1518, mediante la cual se facilita a las grandes empresas agroquímicas norteamericanas desmantelar la soberanía alimentaria nacional vinculada con semillas criollas, cercenando con ello la relación y ancestralidad de las etnias respecto a la propiedad histórico-cultural sobre el germoplasma, prácticas medicinales, tradiciones, etc. Antes, ya habían dado cuenta, por vía de las cooptaciones, de enterrar pretensiones de las Altas Cortes en relación con la no realización de consultas previas para el Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Víctimas, Ley de Tierras, Ley de Regalías, Patentes, entre otro cúmulo de acciones que como parte de un gran armazón de medidas, urgían ser aprobadas según peticiones norteamericanas para darle vía franca al TLC con ese país.

Es más, frente a esos cambios de estrategias por parte de quienes detentan el poder económico y político en el mundo, la Oposición colombiana solo ha podido responder en sus mejores momentos de civilidad con propuestas coyunturales y en el peor de los casos, aceptando estar aprovechando fisuras, “cuartos de hora” posibilitadas por las dinámicas de reajuste del Sistema para emerger en el concierto nacional con propuestas para “democratizar”, fortalecer la participación ciudadana, entre otras argumentaciones de fondo, cuando tales orientaciones, por lo que se ha podido evidenciar más adelante en el desinterés y hasta desmonte que el propio Estado ha efectuado hacia las mismas, son parte de las renovadas tácticas de las elites dominantes para apaciguar inconformidades populares y entrar en una nueva etapa de explotación. Así sucedió con los mecanismos de participación ciudadana, la elección popular de alcaldes y gobernadores, las circunscripciones electorales para etnias, la tutela, pero también, con la desmovilización insurgente que precedió a la Constituyente del 91, la emersión del movimiento indígena o al igual que sucede en la actualidad con los asistencialismos y reformas para paliar las miserias y nuevas expectativas del andamiaje jurídico-legal del país para favorecer la recuperación del Gran Capital internacional.

En estas condiciones, las tan cacareadas multiculturalidad y pluriétnicidad, corazón social de la Diversidad que solemos ufanarnos en tener, no han servido sino para alentar emocionalismos nacionalistas efímeros y engañosos, que si bien se corresponden con unas realidades geográficas, biológicas, genéticas, ambientales e histórico-culturales, no tienen en el ESTADO un garante para propiciar endógenamente, los beneficios, redistribuciones, mejoramientos en las condiciones de vida, diálogos sociales, reconocimientos y valoraciones que permitan dignificar la vida de colectividades, territorios y ambientes, compactándonos o cohesionándonos verdaderamente como nación desde la diversidad en que estamos inmersos, como tampoco en las dirigencias políticas de toda índole, proyectos de entendimientos inter-regionales, cayendo en el olvido lo propuesto

sobre Ordenamiento Territorial por Orlando Fals Borda o lo recomendado e investigado por Manuel Zapata Olivella sobre Mestizaje y estructuración del Ser Integral u Hombre colombiano

Más bien, las élites colombianas, reeditando una tradición de sumisión frente a los potentados externos, tanto de viejo como de nuevo cuño, se han visto forzadas a relieves tardíamente tales realidades de nuestro país, con el fin de poder calificar ante los requerimientos internacionales en materia de derechos humanos, ambientales y laborales, así como para posibilitar reestructuraciones en la implementación del modelo económico (ejemplo, la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, capitalismo verde, equidad), ampliar mercados, entre otras necesidades para armonizar eso sí, el funcionamiento de la estructura estatal del país a los vaivenes de los procesos de reordenamiento capitalista en el mundo.

Mientras que por el lado de las diferentes oposiciones al Régimen, no se ha sabido capitalizar esa emersión de nuevas discursividades respecto al reconocimiento de las diversidades, puesto que mientras para algunos sectores de Izquierda, en el mismo sentido de la ultraderecha, los enfoques diferenciales para las etnias discriminan y limitan soluciones globales, otros no han alcanzado a asimilar la alta posibilidad de construir Poder alterno a partir de la región y localidad. De hecho, algunos de estos sectores siguen renuentes en aceptar la etnoeducación como una realidad nacional, ya que la siguen concibiendo, de idéntica forma que el Gobierno Nacional, como educación para Comunidades georeferenciadas o cerradas, visión que ambos casos, sigue contribuyendo a la idea de etnoeducación afrocolombiana e indígena, como educación exclusivamente para Negros e Indígenas. Más allá de la reproducción de estos prejuicios en el imaginario colectivo, está la dificultad de los Partidos de Oposición para generar acciones creativas en las regiones con el fin de propiciar conciliaciones interétnicas que puedan servir para enfrentar focalizada y contextualizadamente las globalizadas, homogéneas y contundentes políticas estatales en materia de proyectos energéticos, agrícolas, mineros, etc. Con ello, es evidente que la atención de algún sector de la Izquierda solo en las elecciones parlamentarias, es altamente indicativo de sus debilidades organizativas en las regiones, pero también, de su ignorancia hacia lo que significa el trabajo en los lugares donde los gobiernos de turno vienen permitiendo la expoliación de los recursos naturales y privatizaciones de toda clase en contra de los intereses de las grandes mayorías de colombianos. Las actuaciones parlamentarias de la Izquierda, si bien han sido impactantes y valientes en el terreno de la parapolítica, cuestión que aparentemente sirvió para forzar la disminución de las tenazas paramilitares sobre los territorios ancestrales, comunidades rurales y donde se concentran y comparten colectividades étnicas, no han permitido en gran parte del país restarle fuerza a las herencias de la parapolítica y de la tradicional politiquería que antecedió, se coaligó y permanece ejerciendo su dominio regional con el fin de viabilizar las grandes políticas y orientaciones del Estado dependiente de los intereses oligárquicos y foráneos.

En este sentido, así como pese a los reconocimientos de las “diversidades” las grandes mayorías poblacionales del país acrecientan sus pobreza en medio de la política extractivista minera, que de manera similar a como socaba los suelos y subsuelos, también erosiona la condición socio-económica de los más pobres, es evidente que en otros sectores donde el Estado ha facilitado la penetración extranjera en complicidad con las mafias y gremios regionales, caso por ejemplo los cultivos y megaproyectos energéticos, palmicultores, bancarios, servicios públicos básicos, salud, etc., tampoco son notables acciones administrativas que evadiendo la tradicional corrupción y mediación politiquera que impiden la adecuada inversión social, se reflejen en transformaciones cualitativas en las condiciones de existencia material de los colombianos del Común.

Pero mucho peor, es que ni las dirigencias de las etnias, como tampoco las de los partidos políticos de oposición, hayan asumido estrategias permanentes y alternas para articular luchas y convertir los problemas

comunes en banderas de acciones que por lo menos deberían reflejarse en supresión de las distancias que separan a indígenas y Afrocolombianos de una verdadera alianza como Pueblo, puesto que también, la consideración de etnias, solo ha servido para separar en vez de unir por la base. Ejemplo patético de eso, son las disputas al interior de cada una por poder y la aceptación que en el Ministerio del Interior existan divisiones administrativas para una y otra. Los Partidos de Oposición y las dirigencias, aún están en deuda con la posibilidad de articulación para poder ser realmente poder. Mientras tanto, paradójicamente, se utilizan discursos reivindicativos que quedan como “ladridos a la luna”, porque los pueblos no tienen la suficiente comprensión de que el Estado además de mantener la división entre Indígenas y Afrocolombianos, también introduce divisionismos al interior de unos y otros, además de afectarlos por igual con una política homogénea y bien compactada a favor del capital foráneo y en detrimento de las condiciones de vida de las grandes mayorías étnicas del país.

Por esta misma razón, es que la Interculturalidad, otro de los conceptos de moda, se estrella contra una cruda y triste realidad: La imposibilidad de concreción para todo el territorio Nacional, por las diferencias que las propias etnias ha introducido regionalmente, las cooptaciones estatales y las violencias institucionales. Tal vez por ello, es que no solamente habría que criticar a las clases dirigentes del país, por haber truncado, a diferencia de otras partes, una reforma agraria, por ejemplo, que entre nosotros se argumenta como una de las principales razones generadora de la violencia que nos sigue azotando, sino también a las Izquierdas, por no proponer un programa inclusivo para las etnias, dejándolas sueltas, concibiéndolas, al igual que el Estado, como realidades autónomas, cuestión que daría para pensar en que en este país, tales fragmentaciones y concepciones inconexas de lo que somos, están en concordancia con las diversidades que nos caracterizan. EN ESTE CASO, ENTONCES NOS HEMOS EQUIVOCANDO DESDE HACE MUCHO TIEMPO, PUESTO QUE EN VEZ DE CENTRALIZACIONES, DEBERIAMOS BUSCAR FEDERALIZACIONES O AL MENOS REGIONALIZACIONES, CON EL FIN DE ESTAR MÁS CERCA DE LA COMPRENSIÓN DE LO QUE REALMENTE SOMOS Y DE LO QUE PODEMOS HACER EN REALIDAD DESDE LA PRECARIEDAD PARA GENERAR MOVIMIENTOS DE GRAN IMPACTO NACIONAL.

Seguir proponiendo proyectos nacionales en donde todos estemos armonizados, no parece ser la mejor fórmula, entre otras razones, porque antes ni ahora lo hemos estado, después de tanto fracaso como nación centralizada. Esto ha sido parte de nuestra tradición, a juzgar porque desde los mismos dominios coloniales se extendió la máxima “de acatar pero no cumplir”, lema que al parecer sigue afectándonos para fortalecer los diálogos inter e infra regionales, pero que en lo fundamental, desde siempre, se ha visto asociada con la debilidad estatal para propiciar los mejoramientos en las condiciones de existencia de la población más desfavorecida por la redistribución justa y permanente de nuestra economía y de la función que hemos jugado en el concierto capitalista internacional. Tal vez por esa misma razón, las distintas formas de contrabando y atajismos para evadir los controles estatales, al igual que las ilegalidades y hasta las actividades de los actores armados del conflicto interno hayan tenido tanta exacerbación en los últimos 30 años, en simultáneo con el creciente deterioro de los tejidos sociales regionales. Tal vez también por ello, al Estado no le haya quedado otra alternativa que fortalecer el centralismo financiero mientras a sangre y fuego asegura las relaciones bilaterales con el gobierno y los halcones militares gringos, en un tácito reconocimiento de la imposibilidad para revertir la fórmula que solo ha permitido a unos pocos salir favorecidos con las genuflexiones políticas y económicas en el direccionamiento de los gobiernos nacionales hacia los intereses extranjeros.

Estas fragmentaciones y dominios paralelos al del Estado Central dependiente, tal vez estén siendo muy bien leídas por parte de quienes más allá de la búsqueda interna de procesos de regionalización y empoderamientos locales alternos, desesperadamente, como los raizales, sureños, chocoanos o los ubicados en zonas fronterizas,

estén diseñando acciones para independizarse o unirse en comarcas a otros países vecinos. Pero también, por las posibilidades que brinda el desplazamiento interno y desigualdades regionales propiciadas por la imposición neoliberal en los últimos años, toda esta situación esté permitiendo utilizar las mismas grandes necesidades socio-económicas concentradas en las principales capitales del país, para que tanto la derecha como la izquierda renueven procesos de poder, incluso, con visos para alcanzar el gobierno de todo el país, tal como sucede en Bogotá, Barranquilla y Medellín. De tal suerte que mientras en el resto del país aumentan los factores para incentivar fragmentaciones y hasta posibles desligaciones del resto del cuerpo nacional, en ciudades como las mencionadas, por efecto de la falta de coherencia del Estado Global para con las grandes mayorías de colombianos en materia de bienestar, soberanía y democracia, el futuro político del país está asociado con la forma como se administre la pobreza emigrada hacia esas urbes. Vaya paradójica pero cierta coincidencia, derechas e izquierdas, tratando de capitalizar en la pobreza y desigualdades, la oportunidad para ejercer el poder nacional. Y todo, desde la apuesta por el Control del Poder Central, mientras, las posibilidades para ejercer gobiernos alternos desde las regiones siguen ignoradas para la oposición.